

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Demandante	RICARDO AUGUSTO ORTIZ ALVAREZ
Demandados	LOGISTICA Y TRANSPORTE TGB S.A.S
Tipo de proceso	Ordinario
Radicado Nacional	05-001-31-05-013-2021-00269-01
Instancia	Segunda
Providencia	Interlocutorio Nro. 43 de 2022
Tema y subtema	Apelación auto que cierra incidente
Decisión	Confirma

Medellín, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, entra a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante, contra el auto del 26 de julio del año en curso, proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Ricardo Augusto Ortiz Álvarez** contra **Logística y Transporte TGB S.A.S**. Radicado número 05001 3105 **013 2021 00269** 01.

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia se tiene que, mediante oficio No. 1028 del 22 de junio del año que corre, el juzgado de conocimiento dispuso ordenarle a la sociedad demandada que aportara lo siguiente:

"(...) -Constancia de aportes al sistema general de seguridad social efectuados al señor RICARDO AUGUSTO ORTIZ ALVAREZ, durante el periodo comprendido entre el 6 de junio de 2019 y el 13 de marzo de 2021 y/o 18 de marzo de 2021.

-Copia de los recibos de pago de nómina y de todos los pagos realizados por la empresa LOGÍSTICA Y TRANSPORTE TGB S.A.S al señor RICARDO AUGUSTO ORTIZ ALVAREZ, durante el tiempo laborado y donde se evidencie a qué concepto corresponde cada pago.

-Liquidación de prestaciones sociales con constancia de recibido por parte del señor RICARDO AUGUSTO ORTIZ ALVAREZ.

-Constancia de consignación de las cesantías en el Fondo al que se encontraba afiliado el señor RICARDO AUGUSTO ORTIZ ALVAREZ, dentro del transcurso de la relación laboral, o de no tenerlas, explicar a cuál fondo se encontraba afiliado. (...)"

2

Concediéndole un término no superior a 10 días, so pena de proceder con las sanciones previstas en la ley.

En auto del 12 de julio del año en curso, la juez de la causa, atendiendo que la demandada no emitía respuesta al correo electrónico del Despacho, dio apertura a incidente de sanción, concediéndole el término de tres (3) días para que atendiera la solicitud o en su defecto, indicara las razones por las cuales no acataba lo petitionado.

En proveído del 26 de julio, el juzgado, puso en conocimiento de la parte demandante por el término de tres (3) días, la respuesta allegada por la sociedad demandada, en relación con el requerimiento y seguidamente por haberlo atendido, procedió a cerrar el incidente de sanción iniciado, precisando que no se generaban consecuencias adversas en su contra.

Inconforme con lo anterior, el apoderado judicial del demandante **interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación**, solicitando se dispusiera continuar con el trámite incidental y la posible sanción si el accionado no cumplía con la carga judicial impuesta, por cuanto a su juicio sólo aportó los pagos de salarios y nómina y no los comprobantes y la relación de todos los pagos realizados a su representado especificando su concepto, tal como fue dispuesto, máxime que al contestar el hecho cuarto, la demanda se reconoció que: "*Adicional al salario, el señor RICARDO AUGUSTO ORTÍZ recibía algunas sumas adicionales que no hacían parte de su salario pues estas correspondían a gestiones propias que debían hacerse con el vehículo para la prestación del servicio, como anticipos o sumas de otra naturaleza que él como conductor tenía a cargo, pero no eran parte de su ingreso ordinario, pues este estaba*

determinado en el instrumento negocial. Luego eran estos los pagos que la demandada se negaba a reportar, los que se pretenden sean tenidos en cuenta como factor salarial, y en esa medida, negar el acceso a dicha información violenta el debido proceso y el derecho a obtener una sentencia basada en pruebas.

El juzgado de conocimiento a través de proveído del 9 agosto no repuso su decisión, al considerar que el requerimiento quedó satisfecho con la respuesta emitida, la que será valorada en la sentencia donde habrán de resolverse de fondo las pretensiones de la demanda y las excepciones propuestas en la contestación, no obstante, al encontrarse debidamente sustentado y presentado en tiempo el recurso de alzada, procedió a concederlo ante esta Corporación en virtud de lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 65 del C.P.T y de la S.S.

En orden a decidir, basten la siguientes,

Consideraciones

Teniendo en cuenta la decisión adoptada y la inconformidad de la parte recurrente, habrá de examinarse si en el caso concreto hay lugar a cerrar el incidente de sanción contra la sociedad demandada, atendiendo a que no ha sido cumplida la orden del juzgado, como lo asegura el impugnante, o si, por el contrario, se ha satisfecho el requerimiento de la juez de la causa, como ésta lo consideró.

Como se indicó, el juzgado de conocimiento en virtud de la prueba solicitada por el apoderado del demandante, mediante oficio ordenó a la demandada a aportar entre otros, *"Copia de los recibos de pago de nómina y de todos los pagos realizados por la empresa LOGÍSTICA Y TRANSPORTE TGB S.A.S al señor RICARDO AUGUSTO ORTIZ ALVAREZ, durante el tiempo laborado y donde se evidencie a qué concepto corresponde cada pago."*

Frente a este punto se advierte que la entidad requerida le precisó al juzgado lo siguiente (archivos pdf. 29,30,31):

"Se remite en adjunto los comprobantes de pago de nómina realizados por mi poderdante durante el término de la relación laboral que se tuvo con el señor ORTÍZ ÁLVAREZ. Para efectos prácticos, se remite en conjunto el comprobante de las planillas pagadas de aportes Sistema General de Seguridad Social Integral junto con el de la nómina de cada uno de los meses, precisando que la fecha de terminación el contrato fue el 13 de marzo de 2021.

*Igualmente, se precisa al Despacho **que el registro de todos los pagos, tanto de nómina como de anticipos de los diferentes viajes realizados que hacía el señor ORTÍZ ÁLVAREZ en su condición de conductor, eran consignados en su cuenta bancaria de Bancolombia, extractos que fueron aportados por este en la demanda presentada, por lo que se solicita tener dichos registros como los oficiales.***

Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera que la demandada consignaba casi que diariamente diferentes valores, dada la condición especial del servicio que como empresa de transporte se presta, donde se requiere un dinero como adelanto que asigna la compañía para poder realizar la operación, el cual recibía el demandante como empleado para que destinara a los gastos iniciales del transporte."

E igualmente adjuntó los soportes allí enunciados.

En ese orden de ideas, comparte esta Sala los argumentos expuestos por la juez de primer grado, **en el sentido de en que con lo adosado queda satisfecho el requerimiento, sin que pueda hablarse de incumplimiento de una carga judicial y menos de una posible sanción**, pues nótese que la entidad argumenta y acepta pagos adicionales y solicita que se tengan como registros oficiales de todos los pagos realizados al trabajador, los extractos que fueron aportados por éste en la demanda presentada, los que ciertamente ya obran en el expediente y serán valorados con el resto del material probatorio que se recaude durante el trámite al momento de emitirse decisión de fondo.

Y es que no puede perder de vista el recurrente, **que es el juez** como director del proceso, quien adopta las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, (art. 48 C.P.T y de la S.S), conforme a sus poderes de ordenación e instrucción (art. 43 #4 C.G.P), pudiendo exigir la información **que a su juicio considere pertinente y sea relevante para los fines del proceso**, siendo esto de su resorte y discrecionalidad, máxime que en virtud del artículo 54, del estatuto procesal laboral, el juez tiene la facultad de decretar y practicar pruebas de oficio, así lo establece la disposición en cita: *"además de las pruebas pedidas, el juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o a quienes aproveche, **la práctica de todas aquéllas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos***

controvertidos.” (resalto fuera del texto). Luego será la juzgadora y no la parte quien defina si durante el transcurso del debate es necesario o no requerir nuevamente a la sociedad demandada para efectos de que eventualmente allegue o no cualquier otra prueba que considere pertinente, y es que no puede olvidarse que es el funcionario judicial, al proferir su decisión, quien analiza los medios de convicción allegado (art. 60 C.P.T y de la S.S) y que además no está sujeto a una tarifa legal de pruebas, salvo casos excepcionales, por lo tanto, *formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes.* (art. 61 ibidem).

En ese orden de ideas, será la juez de conocimiento, como directora del proceso, quien si lo considera indispensable, podrá en este caso, atendiendo a las situaciones fácticas, y desarrollo del trámite y para mejor proveer, decretar y practicar otras pruebas que eventualmente discorra pertinentes, ello teniendo en cuenta, que en materia laboral se busca la verdad real por encima de la meramente formal, y precisamente en virtud a la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo y de la seguridad social, el juez debe actuar para superar las deficiencias probatorias o de gestión judicial que puedan presentarse a fin de evitar una irreparable decisión de privar de un derecho a quien realmente se le debe reconocer.

Así las cosas, conforme a las anteriores reflexiones, se impone la confirmación de la decisión de primer grado, sin que haya lugar a condena en costas al no haberse causado, art. 365-8 del C.G. del P..

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, CONFIRMA** el auto de fecha, naturaleza y procedencia conocidas.

Por Secretaría remítase el expediente digital con la presente actuación al Juzgado de origen para el trámite pertinente.

Sin costas en esta instancia. Artículo 365 – 8 del C. G. del P.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, en virtud de lo dispuesto en articulo 295 C.G. del P, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

Los magistrados, (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados No. 150 del 25 de agosto de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>